

La rebelión delahuertista: Lecciones de un ensayo fallido

Pedro F. Castro Martínez

Este ensayo trata sobre la llamada "Revolución delahuertista" de 1923-1924, en México. La importancia de este movimiento está fuera de discusión: fue la fisura más grave dentro de la "familia revolucionaria" que asumió la hegemonía después de la derrota de Francisco Villa en 1915-1916. La Rebelión de Agua Prieta de 1919 también representó una división seria del grupo revolucionario triunfante, pero no comprometió una cantidad similar de recursos materiales y humanos, no duró tanto tiempo, y tampoco fue un movimiento en el que una gama comparable de fuerzas políticas —nacionales e internacionales— estuvo presente. La rebelión delahuertista, que duró alrededor de un año, mostró, por segunda vez desde la difícil sucesión de Carranza, que la alternancia de los grupos políticos dominantes en la cima del poder, con la Presidencia de la República como el premio superior, carecía de los mecanismos institucionales apropiados. Después de que la delicada balanza de fuerzas existentes bajo Porfirio Díaz fue hecha añicos por la oleada revolucionaria de 1910, no sería sino hasta la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) cuando la nueva balanza de fuerzas fue definitivamente establecida.

Hemos optado por situar nuestro tópico dentro del contexto teórico general de las revoluciones. Decidimos hacer tal cosa por dos razones de peso: primero, porque con frecuencia las rebeliones comparten características comunes con otros fenómenos en los que existe un reto al monopolio estatal del uso de la fuerza, sobre todo con las revoluciones

en su fase ascendente; en segundo lugar, porque cuando se ponen de relieve tales características comunes se llega a un campo de acuerdo en el que existen mayores recursos teóricos capaces de explicar mejor el fenómeno. Tal campo de acuerdo se expresa en la consideración de las rebeliones como situaciones revolucionarias, en tanto que en aquéllas se da un desafío al monopolio estatal del uso de la fuerza. A fin de echar más luz sobre esta cuestión consideramos pertinente utilizar algunos conceptos desarrollados por Charles Tilly y Peter Amann¹ acerca de ese punto. Tilly está de acuerdo en la naturaleza controversial del término revolución, y hace una distinción entre situaciones revolucionarias y resultados revolucionarios. Siguiendo la definición de Amann, él entiende una situación revolucionaria como aquélla que "prevalece cuando el monopolio del poder estatal es efectivamente desafiado, y persiste hasta que un monopolio del poder es reestablecido".² Esta definición operativa nos permite sortear los problemas tradicionales relacionados con las diferencias entre golpes de Estado, rebeliones, guerras civiles, guerras de independencia y otras situaciones en las que la obtención de la supremacía política tiene lugar con diferentes grados de violencia. Tal definición, además, tiene la ventaja de que no se requiere ningún conocimiento de lo que pasa a continuación o de las causas específicas de tales fenómenos.

La característica particular de una situación revolucionaria es la presencia de uno o más bloques de poder contendientes en control de una parte significativa del aparato estatal, esto es, sectores de su poder militar, administrativo y/o judicial. Los avances a este grado de los bloques de poder se manifiestan a su vez en la existencia del llamado poder dual; esto es, cuando los contendientes al orden establecido han concentrado en sus manos una parte significativa del poder estatal. La "soberanía múltiple" (Tilly), por otro lado, es una

característica inequívoca de las situaciones revolucionarias. La soberanía múltiple acaso es un fenómeno que no puede ser detectado a primera vista. No hay gobierno en el mundo capaz de ejercer control total sobre sus súbditos, ni capaz de estar libre de desafíos de sus oponentes. Aún más, la presencia o expansión de áreas autónomas pueden no ser signos concluyentes. Es más conveniente observar que el momento revolucionario llega cuando miembros de la población previamente aquiescentes se encuentran confrontados con demandas incompatibles de gobierno, y obedecen a un cuerpo alternativo que demanda control sobre el Estado. Cuando un sector de la población paga impuestos, provee hombres para los ejércitos rebeldes, honra los símbolos revolucionarios, proporciona servicios diversos a la causa opositora o libera otros recursos suyos a pesar del gobierno todavía existente al que antes obedecía, la soberanía múltiple ha comenzado.³ Las circunstancias fundamentales de la soberanía múltiple son, por tanto: 1. La presencia de contendientes, o coaliciones de contendientes, que hacen avanzar sus propias demandas alternativas para el control sobre el gobierno detentado por otros; 2. La aceptación de esas demandas por un segmento significativo de la población, capaz de poner en estado de alerta al gobierno existente, y 3. La inhabilidad o falta de disposición de los agentes del gobierno para suprimir la coalición alternativa y/o el apoyo para sus demandas.⁴ La emergencia de un sistema político alternativo bien puede estar relacionada con ciertas condiciones que muchos analistas consideran como *precipitantes* de la revolución: despojo relativo, conflicto de valores, descontento creciente o frustración colectiva. Sin embargo, esta relación, que los allegados a las teorías psicologistas o del valor/consenso adelantan en un sentido causa-efecto, debe ser probada más que asumida.

No es posible concebir la emergencia de nuevos y potencialmente exitosos opositores sin considerar el papel de la ideología. A fin de acelerar la movilización, los desafiantes usualmente ofrecen una ideología característica y una percepción de la sociedad. La motivación ideológica representa un importante activo en una circunstancia revolucionaria para ambas partes del conflicto, en tanto que la ideología une las creencias personales con una visión más amplia del mundo. En este aspecto, los intelectuales juegan un papel estratégico en una situación revolucionaria. Los desafiantes, entonces, despliegan una ideología que pretende neutralizar e incluso destruir la ideología dominante. Aquella puede ser una ideología claramente antagónica, enraizada en los agravios pasados y presentes de los oprimidos, así como en los *desideratae* históricos de países, pueblos, grupos o clases, y es generalmente expresada en términos idealistas. En contraste, una ideología cuyo elemento de desafío es limitado, estará limitada en su audiencia, y por lo tanto, en el alcance de movilización de sus simpatizantes.

División de la "familia revolucionaria"

La elevación al poder del "grupo de Sonora" —encabezado por los generales Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, así como por Adolfo de la Huerta—, tuvo sus principios en la exitosa rebelión de Agua Prieta del 23 de abril de 1919. Desde ahí hasta septiembre de 1923, estos tres hombres formaron un *inner cabinet*, y dos de ellos ocuparon la Presidencia de la República: De la Huerta fue presidente provisional de junio a diciembre de 1920, mientras que Alvaro Obregón tomó el poder inmediatamente después, hasta noviembre de 1924. Bajo la administración de Obregón, Adolfo de la Huerta tuvo el portafolio de la Secretaría de Hacienda. Éste era

uno de los puestos clave de la administración, considerando que el arreglo de la deuda externa por entonces era el problema financiero más apremiante para el gobierno de Obregón.

No es el propósito de este trabajo analizar la cuestión de la deuda externa en estas fechas; baste indicar que durante las negociaciones en Nueva York en 1922, que culminaron con el Acuerdo De la Huerta-Lamont, entre el gobierno mexicano y los banqueros, aparecieron las primeras fisuras en las relaciones entre Obregón y el secretario de Hacienda.⁵ Las negociaciones fueron largas y difíciles. Por su parte, el Presidente de la República aprobaba con lentitud las proposiciones de De la Huerta. La verdad era que el general Obregón estaba cada vez más impresionado por el talento financiero de su secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, quien se convirtió en un consejero importante del presidente en asuntos que estaban formalmente bajo la jurisdicción del secretario de Hacienda. Sobra decir que el criterio de Obregón sobre las negociaciones estaba normado por las opiniones del ingeniero Pani, quien criticaba las iniciativas de don Adolfo en las juntas de gabinete. De la Huerta perseguía también un propósito no declarado en las negociaciones de Nueva York: preparar el reconocimiento de Washington al gobierno de Obregón, que él esperaba que seguiría al arreglo de la deuda y a la confirmación de los derechos petroleros adquiridos por los intereses norteamericanos antes de 1917.

El reconocimiento resultó de las llamadas Conferencias de Bucareli, una serie de reuniones sostenidas en la ciudad de México de febrero a agosto de 1923, entre comisiones de los gobiernos norteamericano y mexicano.⁶ Es importante hacer notar en este punto que el ingeniero Alberto J. Pani promovió las Conferencias de Bucareli, y que De la Huerta no fue informado propiamente, desde el principio, sobre su desarrollo y resul-

tados. Después de tratar sin éxito de lograr el reconocimiento norteamericano por otros medios, don Adolfo percibió en los Acuerdos de Bucareli un fracaso político personal a manos de Pani. Esta circunstancia representó un paso adicional en el deterioro de las relaciones entre Obregón y De la Huerta.

Durante 1923 el ambiente político se mostraba cada vez más inquieto a causa de la inminente sucesión presidencial y de la creciente posibilidad de que el general Plutarco Elías Calles y don Adolfo de la Huerta compitieran por el puesto máximo. Poderosos grupos políticos civiles y militares veían con malos ojos la candidatura de Calles, y encontraban en De la Huerta la mejor alternativa para suceder a Obregón. Ellos ejercían una presión constante a fin de que un De la Huerta reticente a competir por la Presidencia cambiara de opinión y se lanzara a la contienda.

La ruptura final de relaciones entre el presidente y De la Huerta vino en ocasión de las tormentosas elecciones para la gubernatura de San Luis Potosí en agosto de 1923. Los principales contendientes en la elección fueron Jorge Prieto Laurens y Aurelio Manrique, este último dirigente del Partido Agrarista y aliado de Calles. El 18 de septiembre de 1923, Prieto Laurens tomó el puesto de gobernador en la ciudad de San Luis Potosí, mientras que Manrique hizo lo mismo en otra parte del estado. Después de hacer a un lado tanto a Prieto Laurens como a Manrique, Obregón pidió al Senado que declarara la "desaparición temporal de poderes" en San Luis Potosí, y estableció un gobierno provisional encargado de organizar nuevas elecciones. El 21 de septiembre de 1923, algunos diputados y senadores, incluyendo a Prieto Laurens, Martín Luis Guzmán, J. M. Álvarez del Castillo y Gustavo Arce, quienes estaban informados de que Obregón estaba a punto de decidir contra el Partido Cooperatista en las elecciones estatales

de San Luis Potosí y Nuevo León, fueron a la Casa del Lago, la residencia de De la Huerta. Convencido por sus visitantes de que los actos presidenciales en estos Estados perjudicaban a sus propios intereses así como a los del Partido Cooperatista, don Adolfo trató de convencer a Obregón de revocar sus decisiones. Sin embargo, no tuvo éxito, pues para entonces el presidente estaba resuelto a terminar con el gobierno de Prieto Laurens en San Luis Potosí. De la Huerta, entonces, pidió a Obregón una licencia por sesenta días, y pronto renunció como secretario de Hacienda.⁷

El Partido Cooperatista de Prieto Laurens perdía miembros día con día en la Cámara de Diputados, y en consecuencia estaba en peligro de perder su control de la Comisión Permanente. Los líderes cooperatistas consideraron que la única manera de detener la desintegración del partido era persuadir a De la Huerta de aceptar la candidatura presidencial lo antes posible, puesto que él era el único capaz de cimentar una eventual coalición anticallista. Sin embargo, lo que finalmente persuadió a De la Huerta de lanzarse como candidato fue la acusación de Obregón y Pani en el sentido de que la crisis financiera del país se debía a la incompetencia de De la Huerta como secretario de Hacienda. El 19 de octubre de 1923, mientras los periódicos publicaban las acusaciones de Obregón, don Adolfo anunciaba que sería el candidato presidencial del Partido Cooperatista.⁸ Al tomar esta decisión, De la Huerta pudo haber estado actuando en contra de su mejor juicio. Él había resistido, después de todo, las presiones para contender por la Presidencia. Sin embargo, parece cierto que el constante acecho de los líderes cooperatistas y su resentimiento por lo que él consideraba un tratamiento injusto en manos de Obregón, lo condujeron a tomar esta arriesgada determinación. Un mes y días antes, ya se había anunciado oficialmente que Calles sería el candidato a

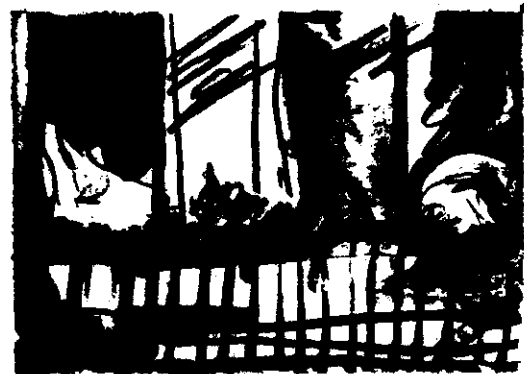
la Presidencia de la República, con el apoyo de Obregón. Ahora los dos antiguos amigos y camaradas se enfrentarían en un conflicto escalado que terminaría en el exilio de uno de ellos.

Las acusaciones del nuevo secretario de Hacienda, ingeniero J. Pani, en contra del desempeño financiero de De la Huerta, estuvieron contenidas en un documento formal. En éste, De la Huerta fue presentado públicamente como un administrador incompetente y corrupto, responsable de la debacle moral y material de México, porque "él había llevado a cabo actos sin la aprobación del gobierno". Don Adolfo inmediatamente rechazó tales acusaciones, y defendió su actuación como funcionario el 19 de noviembre de 1923, ante una comisión investigadora congresional. Cuando concluyó su defensa, fue aplaudido ruidosamente por sus partidarios, entre los que se encontraban Rafael Zubaran Capmany, Francisco Field Jurado, Federico González Garza, y otros.⁹

Es interesante mencionar que durante las campañas de los candidatos que ya se habían iniciado se percibían ya diferentes contenidos en los discursos de los contendientes principales. El partido de Calles asumió postulados "radicales", mientras que los delahuertistas se manifestaban abiertamente moderados. Con frecuencia el general Calles anunciaba su intención de pelear en contra del "capitalismo, los terratenientes y la iglesia". De la Huerta, por su parte, enfatizaba los estímulos a la inversión extranjera y la "sólida reconstrucción de la República", y sus partidarios insistían en que él, contrariamente a Calles, no era un "radical".¹⁰ Los allegados a la causa callista incluían a la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) y a su brazo político, el Partido Laborista; al Partido Agrarista, a los partidos socialistas de los estados, a la minoría disidente del Partido Cooperatista y a un sector importante del ejército. Los principales partidarios de De la

Huerta, por su parte, eran la mayoría del Partido Cooperatista y sectores distanciados del régimen obregonista en el movimiento obrero y el ejército.

Los ferrocarrileros y los sindicatos que en 1921 abandonaron la CROM para formar la Confederación General de Trabajadores (CGT), simpatizaban con la candidatura de De la Huerta. Éste había apoyado desde sus orígenes a la CSF (Confederación de Sindicatos Ferrocarrileros), y para 1923 dos importantes líderes de esta organización, Pedro de León y Eduardo Venegas se declararon abiertamente delahuertistas. En diferentes partes del país aparecieron clubes políticos en favor de don Adolfo, y hasta fue creado un Partido Nacional Ferrocarrilero con una sensible influencia delahuertista. Algunos miembros de la CGT fundaron el Partido Mayoritario Rojo, y dos miembros del Comité Central cegetista, Rosendo Salazar y José Escobedo, también



Pani y Garza

en el año 1923

apoyaron públicamente la candidatura de De la Huerta. En el ejército, un buen número de oficiales estaban descontentos con el curso reciente de las políticas gubernamentales, y en especial con el apoyo obregonista a Calles. Tal resentimiento trataba de ser encauzado por generales disidentes tales como Enrique Estrada, Salvador Alvarado, Fortunato Maycotte y Rómulo Figueroa. Obregón estaba informado a medias de sus actividades opositoras, pero en el momento el traslado de los generales más poderosos era riesgoso en alto grado. Es oportuno señalar que los intentos de formación de un partido anticallista encabezado por oficiales y civiles no tuvo éxito. Los líderes cooperatistas con Prieto Laurens al frente trabajaban intensamente para atraer a los militares descontentos a la causa delahuertista. Las conspiraciones estaban a la orden del día. El general Enrique Estrada estaba dispuesto a unirse a una rebelión eventual en occidente, mientras el general Guadalupe Sánchez, con tropas en Veracruz y en el oriente, manifestaba su intención de encabezar una revuelta contra la "imposición de Calles", tan pronto como De la Huerta se le uniera. El primer general en lanzarse a la rebelión fue Rómulo Figueroa, el jefe de operaciones militares en Guerrero, quien se levantó a fines de noviembre, sin programa o plan revolucionario. Don Adolfo, sin embargo, a pesar de estos signos y de las constantes insinuaciones de Prieto Laurens y Zubaran Capmany, se resistía a abrazar la alternativa armada.

De la Huerta se vio forzado a cambiar de opinión a causa de los rumores sobre la existencia de un plan para asesinarlo y de informes de que el general Arnulfo Gómez había firmado una orden de arresto en contra de J. M. Álvarez del Castillo, Prieto Laurens, Gustavo Arce, Salvador Franco Urías, Rubén Vizcarra y el mismo De la Huerta. El 4 de diciembre de 1923, De la Huerta se reunió en su casa con sus asociados más cercanos, donde

se discutió cómo evitarían a sus enemigos. Prieto Laurens sugirió que abandonarían la capital y aceptarían la protección del general Sánchez en Veracruz. El tiempo era crítico, porque éste podía ser depuesto en cualquier momento, y en tal eventualidad el principal apoyo militar de De la Huerta estaría en peligro. Aunque don Adolfo resistía la idea de comprometerse en un movimiento armado, acabó cediendo ante los argumentos de sus partidarios. En efecto, Obregón aplicaba presión sobre sus enemigos a fin de forzarlos a actuar prematuramente. Después de algunas peripecias, los delahuertistas traspasaron las zonas de peligro, y en la madrugada del 5 de diciembre de 1923, Adolfo de la Huerta fue recibido en Veracruz por Guadalupe Sánchez y su jefe de Estado mayor, general José Villanueva Garza¹¹.

La rebelión

El 6 de diciembre de 1923, Adolfo de la Huerta lanzó su Plan Revolucionario de Veracruz. En él, don Adolfo denunció el intento de Obregón de imponer la candidatura del general Plutarco Elías Calles, "usando los recursos del gobierno, los empleados públicos, y, principalmente, al ejército, como una fuerza decisiva..., pretendiendo corromper así su notable origen revolucionario y el espíritu noble de la institución".¹² Así comenzaba un movimiento cuya escala puede ser observada con los datos siguientes: el 30 de noviembre, el ejército federal constaba de aproximadamente 50 mil soldados, 8 583 oficiales, 2 758 jefes y 508 generales. De ellos, el 5 de diciembre 23 mil soldados, 3 mil jefes y oficiales, y 102 generales estaban en rebelión. Es importante notar que aunque el gobierno perdió cerca de la mitad de las tropas, retuvo la lealtad del 60% del cuerpo de oficiales, que hicieron posible la reorgani-

zación rápida de sus fuerzas, dado el hecho de que la calidad del mando era esencialmente mantenido.¹³ A fin de lanzar la campaña contra los rebeldes, el gobierno calculó que necesitaría 50 mil rifles, 50 millones de cartuchos, 20 aeroplanos y un millón de pesos diarios. El Ministerio de Guerra tenía un presupuesto de 60 millones de pesos, pero 60 millones de pesos adicionales eran necesarios para organizar nuevas tropas. El gobierno calculaba que en dos meses, la rebelión habría alcanzado su clímax o ya estaría derrotado. Por su parte, De la Huerta tenía a su disposición 4 millones de pesos provenientes de las aduanas y de las comandancias militares ocupadas por los rebeldes. Esta cantidad, adicionada a los préstamos e impuestos que los rebeldes podían obtener, apenas llegaba a los 10 millones de pesos. Era entonces evidente que por razones financieras los rebeldes solamente podían sostener una guerra corta.¹⁴

La llamada "Revolución delahuertista" tuvo el apoyo inmediato en diferentes puntos de la República, incluyendo la de líderes militares prominentes, tales como Enrique Estrada, Antonio I. Villarreal, Salvador Alvarado, Cesáreo Castro, Ramón B. Arnaiz, Manuel M. Diéguez, Rafael Buelna, Cándido Aguilar y Rómulo Figueroa, entre otros. El presidente Obregón reaccionó enérgicamente ante la amenaza: obtuvo poderes extraordinarios del Congreso y de inmediato se dispuso a encabezar las operaciones contra Estrada en el occidente. Obregón estableció sus cuarteles generales en Irapuato, y envió al general Plutarco Elías Calles a Nuevo León y San Luis Potosí a fin de reclutar soldados entre los campesinos de estos lugares. El presidente también envió a don Ramón Ross a Washington a conseguir el apoyo financiero y militar del gobierno de Estados Unidos, mientras que el general Arnulfo R. Gómez fue nombrado comandante militar del valle de México, con



instrucciones precisas de perseguir a los delahuertistas de la capital.

Mientras Obregón se encontraba sobre todo a la defensiva durante diciembre de 1924 y enero de 1925, obtuvo un apoyo que probaría ser muy importante en la lucha contra los rebeldes delahuertistas: el de los miembros de la CROM y los agraristas armados. Por su propia iniciativa, el Comité Central de la CROM lanzó una carta circular a todos los sindicatos afiliados invitándolos a defender al gobierno por todos los medios posibles. Trabajadores fueron armados y movilizados, tales como los organizados por Celestino Gasca en su brigada "La libertad", o los miembros de la Unión Minera de Coahuila, dirigidos por Ricardo Treviño en el regimiento Felipe Carillo Puerto. Samuel Yúdico, un miembro mayor de la CROM, fue nombrado administrador en jefe de la división encabezada por Calles, y Ezequiel Salcedo, el líder de los tipógrafos, fue nombrado supervisor

del gobierno militar de Zacatecas. Muchos trabajadores se enlistaron en el ejército federal: 10 mil trabajadores fueron movilizadas en Puebla, y las agencias de la CROM en Nuevo León, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes y Veracruz también hicieron una contribución importante en este respecto. Además, la CROM proporcionó el transporte de los camiones urbanos de la ciudad de México, y material de los Establecimientos Fabriles Militares.¹⁵

Sin embargo, más importantes que los trabajadores fueron los miles de agraristas, sobre todo los movilizadas por el general Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, donde Calles estableció su cuartel general. El Partido Nacional Agrarista, que decía contar con dos millones y medio de afiliados bajo el liderazgo de Aurelio Manrique y Antonio Díaz Soto y Gama, dio su apoyo al gobierno federal contra los delahuertistas. La participación de los agraristas, sobre todo los de San Luis Potosí, Michoacán, Durango, Veracruz, Puebla y Zacatecas, permitió al ejército federal concentrarse para defender o capturar aquellos lugares de mayor interés estratégico. Los regimientos campesinos actuaron como una suerte de policía rural, defendieron la retaguardia de los federales y constituyeron reservas militares en los territorios ocupados por los rebeldes.¹⁶

El gobierno de los Estados Unidos, sin duda, jugó un importante papel en el conflicto al apoyar a un partido contra el otro.¹⁷ El general Obregón envió a don Ramón Ross a Washington, a fin de persuadir a la Casa Blanca para que vendiera las armas necesarias a la administración mexicana. Ross tuvo éxito en su encargo, y Estados Unidos decidió proveer ayuda incondicional.¹⁸ Washington proveyó suministros generosos a Obregón, incluyendo 11 aeroplanos De Haviland, 20 mil rifles Enfield, 33 ametralladoras y 5 millones de cargas de munición.¹⁹ Las compañías petroleras estuvieron intere-

sadas también en el restablecimiento de la paz, porque la guerra prolongada interrumpiría la bonanza petrolera del momento. Ellas, en consecuencia, intercedieron con el gobierno estadounidense a favor del Presidente Obregón. El gobierno pidió un préstamo a las compañías petroleras por 15 millones de dólares para cubrir gastos de la lucha y no encontró oídos sordos: la *Huasteca Petroleum Company* facilitó 10 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.²⁰ Por su parte, De la Huerta envió un equipo de negociadores a Washington bajo la dirección de Alvarez del Castillo con el propósito de conseguir el apoyo del gobierno norteamericano a la causa rebelde. El argumento fuerte de los delahuertistas era que si Estados Unidos no intervenía en México en favor de don Adolfo, pronto se establecería un gobierno "comunista".²¹ Sin embargo, los norteamericanos se habían aliado ya a la administración establecida.

El gobierno de Estados Unidos actuó de diversas maneras en contra de los rebeldes. Ya hemos mencionado la venta de armas al gobierno obregonista, y a esta medida siguió un embargo de ventas de armamento a De la Huerta. El 16 de enero de 1924 el encargado mexicano de negocios en Washington, Manuel Téllez, pidió permiso a fin de que dos mil soldados federales cruzaran territorio norteamericano, de Naco, Sonora, a El Paso y Laredo, Texas. El permiso fue concedido por tres ocasiones "con la condición de que ellos viajarían desarmados por los Estados Unidos, y de que las armas y municiones serían transportadas como equipaje".²² Los delahuertistas sostuvieron que Washington intervino directamente en la guerra, con el envío de pilotos bajo el mando del capitán O'Neil, quienes realizaron bombardeos aéreos sobre tropas del general Enrique Estrada en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.²³ Aún más, Estados Unidos situó varios barcos de guerra en aguas frente a Veracruz cuando este puerto se en-

contraba bajo el control de De la Huerta. El propósito de los barcos norteamericanos era imponer un virtual bloqueo a la ciudad, y vigilar los movimientos de la Flota del Golfo (controlada por los rebeldes), en caso de que ésta pretendiera realizar ataques contra otros puertos, como el de Tampico. Cuando se supo que De la Huerta en efecto pretendía atacar Tampico, los norteamericanos amenazaron con situar al crucero Richmond aquí a fin de impedir cualquier movimiento de barcos en el área y "proteger debidamente la paz y el legítimo comercio de los Estados Unidos". Cuando el barco delahuertista G-3 se disponía a atacar Tampico, su capitán desistió a causa de la presión de los marinos norteamericanos. Finalmente, cuando se anunció que el Richmond realizaría un desembarco en Veracruz, los rebeldes decidieron abandonar definitivamente el puerto el 5 de febrero de 1924, "a fin de evitar cualquier incidente de consecuencias internacionales".²⁴

Las muertes violentas de Felipe Carrillo Puerto y Francisco Field Jurado tuvieron amplias repercusiones durante el periodo de la rebelión. Los enemigos de Carrillo Puerto en Yucatán aprovecharon la revuelta para derrocar al Partido Socialista del Sureste; Carrillo Puerto, sus hermanos y su chofer fueron masacrados a principios de 1924 por los rebeldes peninsulares, a pesar de las órdenes de De la Huerta de que se respetaran sus vidas y fueran enviados a Veracruz.²⁵ El asesinato de Carrillo Puerto y compañía fue perjudicial en alto grado al movimiento delahuertista, y causó una repulsa general en todo el país. El senador Francisco Field Jurado, por su parte, se había convertido en un obstáculo para la aprobación en el Senado de la Comisión General de Reclamaciones, emanada de las Conferencias de Bucareli. Mientras la rebelión delahuertista se prendía en varias partes del país, Field Jurado y sus seguidores cooperatistas boicotearon los debates, impidiendo de



esta manera la ratificación del acuerdo, puesto que los dos tercios necesarios no estaban presentes en la Cámara. En enero de 1923, Francisco Field Jurado fue asesinado en una calle de la colonia Roma, y su crimen permaneció en el misterio. Un discurso pronunciado por Luis N. Morones casi dos semanas antes, en el que sentenciaba una venganza cierta contra los delahuertistas, implicaba al líder laborista en el hecho, pero él negó enfáticamente su participación, y ningún cargo se le pudo probar.

En el frente militar los éxitos prematuros de los rebeldes probaron ser efímeros. Las derrotas aparatosas que siguieron a las victorias del principio, tales como las de Estación Esperanza, Ocotlán y Palo Verde, entre otras, hicieron el camino del desastre. En un intento por ganar mayor apoyo para su causa, el "Jefe Supremo" Adolfo de la Huerta lanzó una proclama en Frontera, Tabasco, el 29 de febrero de 1924. En su "Manifiesto a la Nación", don Adolfo buscó definir su lucha como una guerra nacional contra aquellos "que han vendido la soberanía mexicana al gobierno extranjero, a cambio de barcos, aviones, rifles, municiones y dinero". "Los hijos de la Nación —continuaba la proclama— están invitados a defender la Patria, a pesar del asesinato de legisladores por el gobierno, así como del uso de los cañones extranjeros y de la contratación de pilotos norteamericanos para sembrar la muerte entre ancianos, mujeres y niños mexicanos".²⁶

Después de permanecer un mes en Frontera, De la Huerta abandonó el territorio mexicano y se dirigió a Cuba y a Estados Unidos a fin de buscar apoyos para su causa en Washington y Nueva York. Su intento de resolver la sucesión de la Jefatura Suprema fracasó y durante 1924 los territorios rebeldes fueron cayendo, y sus líderes militares y civiles acabaron en la muerte, la cárcel o el exilio.

Fueron varias las causas de la derrota delahuertista. Desde el punto de vista de los ganadores, hicimos notar la importancia del apoyo proporcionado por un importante sector del ejército, y por los trabajadores y campesinos organizados del Partido Laborista, el Partido Nacional Agrarista y los partidos socialistas de los estados. El fuerte respaldo del gobierno de Estados Unidos y de las compañías petroleras norteamericanas que operaban en México, fue un importante activo de Obregón durante la guerra. Estos apoyos, combinados con el indiscutible talento militar de Obregón, fueron los principales ingredientes de la victoria gubernamental. Las dotes organizativas en las esferas política y militar de Obregón contrastaron los defectos de sus oponentes, particularmente del mismo De la Huerta. Primero reticente a aceptar la candidatura presidencial en contra de Calles, don Adolfo prefirió correr el riesgo que ser dejado en la oscuridad política. Su decisión de aceptar la candidatura fue impetuosa y mal considerada. Después quedó atrapado entre su deseo de reconciliarse eventualmente con Calles y las exigencias de conducir una guerra difícil. Su vacilación le impidió convertirse en un líder efectivo en la revuelta. Por otro lado, los jefes militares rebeldes no tuvieron un comando unificado y las acciones militares resultaron incoordinadas. Ambiciones personales impidieron que alguien con una visión amplia pudiera ser el líder político sobre las facciones. La rebelión delahuertista se distinguió por la heterogeneidad de mando, la falta de unidad y la falta de apoyo bélico entre los rebeldes. Estas debilidades permitieron a Obregón concentrar sus ofensivas de guerra contra puntos aislados. El mismo De la Huerta fue completamente incapaz de unir a sus seguidores en un frente común, y bien parece que él fue reducido a la condición de una mera figura simbólica del movimiento, mientras que cada general actuaba de la manera que consideraba más correcta.

Desde el punto de vista ideológico, al delahuertismo le faltó un cuerpo fuerte de doctrina y programa; la pobreza de sus proclamas no llegó más allá de los grupos políticos disidentes del obregonismo. La composición altamente heterogénea y los diferentes intereses presentes en el movimiento —militares ambiciosos, personajes "progresistas" fuera de contexto, políticos desplazados, revolucionarios revanchistas, obreros disidentes— no expresaron reformas profundas en las estructuras económicas o políticas: ellos tenían en la hostilidad contra Obregón y Calles la única cosa en común. Las limitaciones ideológicas de la rebelión fueron en mucho responsables de su fracaso. A fin de promover la movilización de los grupos existentes y ayudar a crear nuevos apoyos, es necesaria la presentación de una visión alternativa del mundo. Tal visión, por supuesto, se expresa y articula en términos ideológicos. En el plano ideológico la rebelión delahuertista fue incapaz de proponer programas nuevos, alternativos, y esto impidió que se convirtiera en un amplio movimiento de masas. Pero no era la intención de los líderes rebeldes crear un movimiento popular, y aquí las autolimitaciones probaron ser funestas. A juzgar por la ideología rebelde, sus manifiestos, sus orígenes sociales y los papeles ocupacionales de los líderes rebeldes, y hasta cierto punto de sus partidarios, así como el alcance de sus proclamas populistas, el delahuertismo no proponía ninguna reforma social de envergadura en caso de que tomara el poder. La experiencia revolucionaria reciente había hecho conscientes a los delahuertistas de limitar su programa a fin de no invitar a elementos "incontrolables" o "indeseables" que podían rebasar la línea moderada de los rebeldes. La revolución maderista había atraído las demandas populares por la redistribución de la tierra en su primera fase, y las lecciones derivadas de esta experiencia habían quedado muy claras después de 1915. La

retórica del cambio revolucionario estaba firmemente en la boca del gobierno durante la rebelión de 1923-1924, y los rebeldes delahuertistas no quisieron o no pudieron presentarse como "la verdadera alternativa revolucionaria" vis a vis Obregón- Calles. Las clases subordinadas no participaron en la insurrección, mientras que trabajadores armados y agraristas dieron su apoyo al gobierno de diferentes maneras. Existen evidencias de que en ocasiones —principalmente durante las nego-



ciaciones con los gobiernos extranjeros— los líderes rebeldes contrastaron su moderación con las tendencias "bolcheviques" de Obregón-Calles. Por otro lado, no hay pruebas de que el movimiento haya sido esencialmente un instrumento de la oligarquía porfiriana debilitada a fin de lanzar la contrarrevolución. No hubieron elementos del antiguo régimen en la revuelta, ni siquiera en forma marginal. Es cierto, sin embargo, que terratenientes de Jalisco, Colima y Nayarit vieron en la revuelta una oportunidad de detener el programa de reforma agraria en sus dominios. En contraste, la rebelión movilizó un buen número de grupos antiporfiristas que habían sido derrotados en la revolución —tales como los villistas, zapatistas y carrancistas que quedaban en pie.

Los líderes delahuertistas probaron ser incapaces de entender la naturaleza del Estado que emergía de las cenizas del régimen porfiriano. Después del triunfo de Carranza y la proclamación de la Constitución de 1917, los sucesivos gobiernos fueron dueños de una ideología que lanzaba promesas de reformas en la tierra y en el trabajo con el propósito de convencer a las masas de su posición igualitaria frente a otros elementos de la sociedad mexicana. Los trabajadores y campesinos organizados eran bases importantes del Estado revolucionario, y los hechos de 1923-1924 reforzaron tal importancia. La retórica revolucionaria relativa a las responsabilidades estatales frente a las clases subordinadas fue mal entendida con frecuencia, originando las acusaciones en el sentido de que Obregón y Calles eran "bolcheviques" o "anarquistas". Tales acusaciones, por supuesto, eran infundadas. El régimen obregonista ejercía cierto control de las masas a través de la CROM/Partido Laborista y —en el campo— a través de los beneficiarios de la reforma agraria, quienes estaban organizados en milicias campesinas por los caciques locales;

este control fue utilizado para movilizar apoyos contra grupos alternativos en desafío a su poder. Las tendencias corporativas en formación del régimen obregonista probaron ser suficientemente fuertes para resistir esa floja coalición de fuerzas dispares que representó el delahuertismo.

La rebelión delahuertista se ubica dentro del patrón de las coaliciones revolucionarias que se fragmentan una vez que ha tenido lugar la toma inicial del poder. Las principales razones de esa fragmentación deben ser vistas en la lucha por la hegemonía dentro de la coalición revolucionaria, en la que los intereses de grupo tuvieron precedencia sobre las luchas ideológicas. No existen evidencias de que alguna disputa ideológica o programática haya estado presente antes de la escisión violenta de la "familia revolucionaria". Parecía que una suerte de triunvirato firmemente establecido iba a durar por muchos años, a pesar de algunos signos en contrario. El énfasis en las posiciones ideológicas o programáticas para explicar el conflicto puede llevar a conclusiones equivocadas. Los personalismos y las luchas personalistas en una situación en la que los caudillos y los caciques tenían las riendas del Estado apenas dejaba espacio para las confrontaciones ideológicas o programáticas. El mantenimiento y la ampliación de los espacios ganados por los grupos civiles y militares llevaron al conflicto de las fuerzas existentes, y tal colisión no podía ser evitada ni remediada por medios institucionales —que no existían por entonces—, sino por las armas. Mirando los hechos de 1923-1924 uno se pregunta si existían posibilidades "pacíficas" de solución de diferencias. La respuesta es no. Ante la falta de mecanismos institucionales de transferencia del poder, las probabilidades de aparición de luchas armadas en la política mexicana de ese tiempo fueron, como la historia lo demuestra, muy altas.

Bibliografía y notas

- 1 Tales conceptos están desarrollados en Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1983, del mismo autor; "Does modernization breed revolution?" en *Comparative Politics*, 5:3 (abril 1973), y Amann, Peter, "Revolution: a redefinition", in *Political Science Quarterly*, v. LXXVII, marzo de 1962, núm.1
- 2 Amann, *op cit.*, pág. 39
- 3 Tilly, *From Mobilization to Revolution... op. cit.*, pág. 192
- 4 *Ibid.*, págs. 200.201
- 5 Los detalles glosados del acuerdo pueden encontrarse en Semo, Enrique. *Historia Mexicana: economía y lucha de clases*, Editorial Era, México, S.A. 1978, págs. 257-264, así como en Robert Freeman Smith, *Los Estados Unidos y el Nacionalismo Revolucionario en México 1916-1932*, 1a. edición, Editorial Extemporáneos, S.A. México, 1973, págs. 305-308.
- 6 El desarrollo de la negociaciones y la síntesis de los resultados se pueden encontrar en Ma. Eugenia López Gutiérrez, *Procedimientos Diplomáticos del Régimen Obregonista: antecedentes y proyecciones*. Tesis profesional. Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1959, págs. 269-270.
- 7 Roberto Guzmán Esparza, *Memorias de Don Adolfo de la Huerta según su Propio Dictado*, 2a. Edición, Ediciones Guzmán, México, 1958, pág. 220.
- 8 *Ibid.*, pág. 243.
- 9 John W.F. Dulles, *Ayer en México: una crónica de la Revolución mexicana*; Fondo de Cultura Económica, México, 1977, págs. 184-187
- 10 G. Summerlin to the Secretary of State, October 19, 1923, en *Microfilms of the US Consular Reports on the Internal Affairs of Mexico (1910-1929)*, Rollo 80, págs. 7-8
- 11 Guzmán Esparza, *op. cit.*, pág. 242.
- 12 *Ibid.*, pág. 243.
- 13 José Valadés, *La Revolución Mexicana*, t. VII, Manuel Quesada Brandi Editor, Cuernavaca, 1967, págs. 286-287. Otro autor nos proporciona información diferente: "El número de sublevados ascendió en su totalidad a 102 generales, 573 jefes, 2417 oficiales y 23, 224 soldados, quienes junto con 25 000 civiles mal armados, reclutados entre campesinos y obreros, hicieron un total de 62 000 hombres en armas, contra los inicialmente (sic) 35 000 soldados leales a Obregón. Por su parte, el gobierno tuvo que crear en un lapso breve (sic) 54 nuevos generales de brigada y promovió a 33 más por "conducta meritoria en el combate"; aprovisionó a cerca de 20 mil nuevos soldados con la ayuda del gobierno norteamericano, que le proporcionó armas, municiones y aeroplanos, impidiendo, además, que los rebeldes pudiesen aprovisionarse en su territorio". Javier Rosas, "Delahuertismo", en *50 años de oposición en México*, FCPS, UNAM, Serie Estudios, 60, México, pág. 31
- 14 Valadés, *op. cit.*, págs. 290-291
- 15 Barry Carr, *El movimiento Obrero y la Política en México 1910-1919*, Ediciones Era, México, 1981, págs. 150-151.
- 16 El reclutamiento de los agratistas, sin embargo, asumió una singular forma forzosa. La política del gobierno de dar posesión provisional de tierras en lugar de la propiedad de los expeones estaba justificada en sí misma. De acuerdo con el cónsul norteamericano en San Luis Potosí, Walter Boyle, soldados bajo el mando del general Cedillo visitaban a los poseedores provisionales de tierras y les informaban que de no alistarse en el ejército federal, sus tierras les serían quitadas. Véase Walter Boyle, cónsul americano en San Luis Potosí, al Secretario de Estado, 5 de enero de 1924, Rollo 81, en *Microfilms...op.cit.*, 1098.
- 17 En este punto, el respaldo de la American Federation of labor (AFL) el gobierno de Obregón fue importante para convencer a Washington de la necesidad de apoyar al presidente mexicano. El 11 de diciembre de 1923, el Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana del Trabajo envió a los sindicalistas mexicanos el apoyo de la posición tomada por los sindicatos de Estados Unidos en defensa del gobierno de Obregón. Samuel Gompers, secretario de la AFL, fue presentado en la prensa internacional como el campeón del gobierno mexicano y de la CROM en Norteamérica. De acuerdo con Summerlin, él "tenía el crédito por las medidas que el gobierno de los Estados Unidos había tomado para impedir el envío de armas a los rebeldes y por sus remesas a las fuerzas federales". Véanse *Microfilms, op. cit.*, 10 de enero de 1924, Rollo 81, 0352 y 1208
- 18 De acuerdo con el Departamento de Estado: "Bajo la administración del general Obregón hubo una restauración de la estabilidad... el comercio y la industria empezaron a ganar confianza de nuevo; hubo un esfuerzo esperanzador para poner las finanzas del país sobre bases sólidas... (Pero) de repente hubo un intento de derrocar al gobierno establecido por la violencia. Es claro que el propósito de los comprometidos en esta empresa armada es simplemente determinar por medidas forzosas la sucesión del presidente Obregón. No es un instinto revolucionario con las aspiraciones de los oprimidos; es un asunto de política personal..." Informe sometido por el Departamento de Estado al líder del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el 28 de enero de 1924, en *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, 1924, vol. II US Government Printing Office. 1939, pág. 2.
- 19 *Ibid.*, pág.3
- 20 Dulles, *op. cit.*, pag. 210.

21 Según J. M. Álvarez del Castillo, "Adolfo de la Huerta pelea contra la imposición de un régimen bolchevique... el movimiento revolucionario busca el establecimiento de un régimen perfectamente definido que dé garantías absolutas a los intereses nacionales y extranjeros, tan seriamente amenazados por el gobierno de Obregón, quien apoya a los jefes de la anarquía y la destrucción que hipócritamente se declaran líderes de la clase trabajadora". Juan Manuel Álvarez del Castillo a De la Huerta, 27 de febrero de 1924, interceptado por el gobierno de Obregón. Archivo de Relaciones Exteriores de México (AREM), L. L. 1566, Actividades Rebeldes, pág. 7.

22 El secretario de Estado al encargado mexicano de negocios (Téllez). Washington, 19 de enero de 1924, en *Papers Relating to the Foreign Relations*, *op.cit.*, pág. 431.

23 Guzmán Esparza, *op. cit.*, pág. 260.

24 Rafael Trujillo, *Adolfo de la Huerta y los Tratados de Bucareli*. 2a. edición, Librería de Manuel Porrúa, S.A. México, 1966.

25 Guzmán Esparza, *op. cit.*, pág. 62.

26 "Declaración de Frontera", 20 de febrero de 1924, en

27 Microfilms... *op. cit.*, Rollo 81, 1072.



Manuel Porrúa ©